Para mí — añadió el señor Chapaprieta — un problema fundamental es el del restablecimiento de la confianza pública. Y se ha producido. Basta que se dé la sensación de que se gobierna. Si comparamos nuestro país con otros que luchan y se esfuerzan por impedir la catástrofe financiera, con un índice de vida infinitamente superior al nuestro y sin los recursos que España tiene todavía sin utilizar, cabe pensar que nos encontramos en un país de privilegio. Se aprobarán los presupuestos, la ley de Restricciones y la de Jurados Mixtos, con otras de menor importancia. Allá para los primeros días de julio se cerrarán las Cortes y en octubre, estaremos otra vez aquí, dispuestos a examinar y a aprobar unos presupuestos que respondan a las necesidades económicas de España. Y también a preparar la propuesta de revisión constitucional. Con esta labor, que es tan clara, y a la que estamos dispuestos, ¿cabe pensar en otros acontecimientos políticos que no sean los del desarrollo normal de esta obra de Gobierno?

El señor González López, dice que no se ha separado de Izquierda Republicana

El diputado gallego señor González López, ha manifestado a los periodistas, que no es cierto que se haya separado del partido de «Izquierda Republicana».

—Lo ocurrido —dijo— es que tuve algunas diferencias con el jefe de la minoría, señor Barcia, y ello debió dar origen al rumor.

Comentarios a la última parte de la sesión

Lo ocurrido en la sesión de esta tarde, al discutirse el dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el proyecto de ley modificando algunos artículos del libro segundo del Estatuto municipal devuelto por el Presidente de la República, sin autorizar su promulgación, fué muy comentado.

El ministro de la Gobernación salió al paso de las manifestaciones hechas por el señor Calvo Sotelo, y hubo de declarar que el Gobierno hacía cuestión de confianza el que se aprobase el voto particular presentado por el señor Pedregal, proponiendo al Congreso negase la aprobación definitiva de la ley devuelta por el Presidente de la República. Puesto a votación de la Cámara el voto del señor Pedregal, pudo observarse que gran número de diputados de la mayoría, y casi la totalidad de los agrarios se ausentaban del Salón, sin votar, y otros, como el señor Rodríguez Jurado, votaron contra el Gobierno con el aplauso de los monárquicos y tradicionalistas.

Los amigos del señor Martínez Barrio, ante la actitud de los diputados de la mayoría, votaron, por indicación de su jefe, al lado del Gobierno. Aunque éste logró salir triunfante de la votación, no muy lucida por cierto, el espectáculo que habían ofrecido los diputados de uno de sus grupos colaboradores en el Ministerio, se prestó, en los pasillos del Congreso, a muy sabrosos y diversos comentarios.

Al terminar la sesión se comentaba lo que anteriormente exponemos entre diputados y monárquicos y periodistas.

—Lo único destacable en la sesión—decía don Honorio Maura—es lo ocurrido en el Salón con la devolución de la ley por el Presidente de la República. De esto ya no queda sino la experiencia de que el señor Gil Robles ha caído en la ratonera.

—Pues hoy mismo el señor Jiménez Fernández—objetó un periodista—ha desmentido las declaraciones que hiciera ayer en el Congreso sobre el señor Azaña y el futuro cuatrienio.

—¿Desmentir?—replicó don Honorio Maura—. Desmentir. Este verbo lo ha desacreditado ya, hasta la saciedad, la C. E. D. A.

Después otros diputados de la mayoría, entre los que se encontraban algunos radicales, decían que se ve claramente la trayectoria de lo que ha de ser la política en fecha próxima.

El Partido Radical, en franca dispersión, después de los sacrificios realizados en favor de las izquierdas y de las derechas. La C. E. D. A., en pleno fracaso, quizá por adaptación al sistema. Se ve claramente que vamos derechos a una política de izquierdas cuya base, o mejor dicho arranque, es la orientación que da al Gobierno el ministro de la Gobernación. Y si no, ahí está el decreto aprobado en el Consejo de esta mañana sobre las concentraciones políticas. Ya no podrá haber ninguna. Y esto echa por tierra toda la labor del jefe de la C. E. D. A.

—Pero, además—decía otro diputado—, es significativo lo ocurrido en la sesión de hoy, votando en contra del Gobierno algunos de sus amigos y colaboradores.

NOTAS PARLAMENTARIAS

Asuntos despachados por la Comisión de Presupuestos

La Comisión de Presupuestos, en su reunión de hoy, dictaminó los siguientes asuntos:

Presupuesto del Ministerio de Hacienda; presupuesto de Gastos y Contribuciones y Rentas públicas; proyecto de creación de una nueva Comandancia de la Guardia civil, en Marruecos; presupuesto de Marruecos; dictamen del paro obrero, e informe sobre el proyecto de Jurados Mixtos, en el sentido de que las gratificaciones a los presidentes de los mismos no pasen de seis mil pesetas.

El presidente de la Comisión, señor Calderón, manifestó que en el presupuesto de Gastos y Contribuciones y Rentas públicas, se había introducido una rebaja de un millón cuatrocientas mil pesetas, y que tan sólo quedan pendientes de dictaminar los presupuestos de Ingresos, Instrucción Pública y Obligaciones Generales del Estado, y espera se encuentren sobre la mesa, en los primeros días de la semana próxima.

Los periodistas supieron después que en el presupuesto de Hacienda hay una rebaja de 300.000 pesetas, que se restan de la consignación para el Patronato de bienes de los Jesuítas.

También piensa la Comisión proponer al ministro la supresión de la Comisión de Represión del Contrabando.

Se ha eliminado la cantidad consignada para los inspectores del Timbre, al objeto de considerarlos como funcionarios, y continuarán en las mismas condiciones que hasta ahora.

Las plantillas del Ministerio de Hacienda quedan como estaban.

El proyecto de ley suspendiendo las elecciones para la renovación de cargos del Tribunal de Garantías

El proyecto de ley leído en la Cámara por el presidente del Consejo, suspendiendo las elecciones para la renovación de los cargos de vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, dice lo siguiente:

«A las Cortes: Con arreglo a lo prevenido en el artículo quinto de la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933, y en el 17 del reglamento de 6 de abril de 1935, dictado para su ejecución, debería efectuarse en la última decena del mes de agosto próximo, la renovación de los cargos de vocales del Tribunal a quienes corresponda cesar por extinción de su mandato y, además, cubrir las vacantes que de ellos existan.

Esto no obstante, las especiales circunstancias actuales relacionadas con el orden público, y singularmente las de hallarse sometido a deliberación de las Cortes un proyecto de nueva ley electoral, aconseja de consuno aplazar esa renovación interín se apruebe la reforma electoral o hasta que el Gobierno estime de absoluta e inaplazable necesidad la provisión de esas vacantes.

En méritos de lo expuesto, el presidente del Consejo de ministros que suscribe, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes el siguiente proyecto de ley:

Artículo único. — Quedan en suspenso las elecciones que deberían celebrarse en la última decena del mes de agosto próximo, conforme a los artículos 5 de la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, y 17 del reglamento del 6 de abril de 1935, para la renovación de los cargos de vocales del referido Tribunal.

Madrid, 20 de junio de 1935. — El presidente del Consejo de ministros, Alejandro Lerroux.»

Reunión de los diputados asturianos para examinar la situación difícil de la minería

En el Congreso se reunieron los diputados por Asturias, de los diversos partidos.

Reconocieron los reunidos la gravísima situación porque atraviesa la industria hullera española, cuyo «stock» actual es de 606 mil toneladas —y 250 mil de antracita— y acordaron pedir la reducción del contingente de importación con derechos arancelarios reducidos. El actual es de 750 mil toneladas, y la revisión del tratado hispanoinglés, que la Gran Bretaña pretende, ha de aumentarlo con daño grave para la minería nacional.

El diputado señor Aza, ha hecho luego declaraciones sobre la importancia del problema. Si se lleva a cabo el tratado en los términos planteados, el hundimiento de la industria hullera sería grave, creándose además, un angustioso problema social de paro obrero.

El tratado de comercio con Rumania

Como anunciábamos en nuestro número anterior, se reunieron en la Sección segunda del Congreso, diputados de diversas minorías y representantes de entidades corcho-taponeras y de exportación, para cambiar impresiones respecto al tratado de comercio que, próximamente, va a suscribir el Gobierno español con el de Rumania.

Asistieron a la reunión diputados de las minorías de la «Lliga», «Esquerra», radicales, especialmente autonomistas valencianos, agrarios y de Unión Republicana, y presidió el señor Ventosa y Calvell.

En nombre del Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona, hizo uso de la palabra el señor Casanova, que planteó la cuestión, en términos generales y pidió su apoyo a los parlamentarios presentes, a fin de que la «Campsa» no sea un obstáculo para la firma del tratado con Rumania. Esto es, que en igualdad de precios, no tenga inconveniente en adquirir petróleo a dicha nación, con lo cual se conseguirían importantes contrapartidas beneficiosas para nuestros exportadores.

A continuación, hablaron representantes de otras regiones, especialmente representantes de los grupos naranjeros de Valencia, y también de los exportadores de Canarias.

Los representantes de las minorías, coincidieron en la necesidad de llegar a un acuerdo comercial con Rumania, y acordaron plantear la cuestión en el hemiciclo. Se nombró una comisión integrada por un representante de cada grupo, la cual va a reunirse el martes próximo para tratar de la labor a seguir Parece que va a hacerse una interpelación al Gobierno, que apoyarán miembros de la mayoría parlamentaria.

Las obras del ferrocarril La Coruña-Zamora

Los diputados por La Coruña señores Iglesias Corral, Sánchez López, O'shea, Blanco Roas y Apperibay, conferenciaron en el Congreso con el ministro de Obras Públicas, señor Marraco, para puntualizar los propósitos del Gobierno sobre las obras de ferrocarril La Coruña-Zamora.

El ministro les dió buenas impresiones, y manifestó que se concluirán las obras, que él mismo visitaría en breve.

LA VIDA CULTURAL

En la Academia Española
Lectura de un poema

El señor Rodríguez Marín ha leído en la Academia Española el poema «Los Atlantes», escrito por el doctor don José Goyanes Capdevila. Se trata de un libro extenso, de versos heroicos, dedicados al descubrimiento del Nuevo Mundo. Tiene cien cantos de distintos metros y el héroe es Cristóbal Colón.

URODONAL
antiartrítico
se expende en frascos de triple cabida para una cura completa

LAS REGIONES

LA REVOLUCION DE ASTURIAS

Hoy se dictará sentencia en el consejo de guerra por los sucesos de Turón

EN LEON, SE PRODUJO UNA EXPLOSION DE «GRISÚ» EN UNA MINA

El quinto día del consejo de guerra

OVIEDO, 21.

CONTINUO LA LECTURA DE LOS INFORMES DE LOS DEFENSORES

A las diez y media de la mañana se reanudó el consejo de guerra por los sucesos de Turón, para que continuara la lectura de los informes de las defensas. Informó en primer lugar don Juan Alberto Navarro, defensor de Amaro Moro González.

Comenzó el defensor exponiendo su temor de que los sucesos de Turón puedan influir en el ánimo del tribunal. Niega la acusación fiscal, sobre todo en lo que se refiere a su patrocinado y rechaza que éste tomara parte en el asalto al cuartel de la Guardia civil y que se dedicara al transporte de dinamita. Respecto a que cometió desmanes, la prueba es favorable a su defendido, porque el fiscal la toma del sumario, que se hace a espaldas de los procesados.

Es del juicio oral — dice — donde han de salir las pruebas. Analiza los cargos que se hacen a su defendido para hacer resaltar que en declaraciones del testigo de cargos, Cándido del Agua, éste se contradice y opone grandes reparos a los procedimientos seguidos para estas declaraciones.

Va rechazando asimismo otras declaraciones de cargo y recoge las favorables para negar la participación de su patrocinado en el movimiento. Se refiere a la ideología católica de Amaro y a sus antecedentes. Entiendo que existen en su conducta causas de eximente por haber actuado en todo caso por miedo insuperable. Termina pidiendo la absolución.

Seguidamente lee su informe el capitán don Luis Fontabellida, defensor de Angel Romero Fernández. Dedica la mayor parte de su informe a combatir las doctrinas llevadas al ánimo de tantos incautos sugestionados por los dirigentes, a los que califica con gran dureza. Dice que su patrocinado, si intervino en los sucesos, cosa que rechaza por falta de pruebas, lo hizo sin conciencia alguna y sin medir las consecuencias. Aun cuando fuera cierta la acusación fiscal respecto a que transportó dinamita, lo hizo sin voluntad propia. Analiza la prueba para afirmar que nadie vió a su defendido asaltar el cuartel de la Guardia civil y termina pidiendo que se tenga en cuenta la falta de pruebas contra su defendido quien, en todo caso, está incurso en un caso típico de delito de muchedumbre.

A continuación informó don Aquilino Zapico, quien defiende a diez procesados.

Comienza declarando que todos sus defendidos son inocentes. Por esta causa — dice — el pueblo de Turón solicita la libertad de ellos. Recoge la declaración de los ingenieros de minas, quienes afirman que uno de sus patrocinados, Jaime Prado, no perteneció al comité. Rechaza que se puedan acumular pruebas por declaraciones llenas de contradicciones hechas con embustes y enredos. Va estudiando la conducta de cada uno de sus defendidos y niega desde luego los hechos de que se les acusa. Habla del error de Derecho que se advierte en la tramitación del sumario y afirma que los tribunales militares no están facultados para rechazar pruebas, sino que sólo pueden no aceptar aquellas que supongan dilación. Se refiere a la actuación indagatoria que se confió a la Guardia civil y, tras de elogiar al benemérito instituto, censura su labor en cuanto al papel indagatorio. Termina pidiendo la absolución de sus defendidos.

Don Aurelio Matilla, defensor de Tomás Martull y Marcelino Tejero, comienza su informe diciendo que las revoluciones siempre que triunfan son heroicas, pero si fracasan, son criminales. Hace la distinción entre revolución y revuelta y dice que en Turón los sucesos revolucionarios adquirieron aspecto de voraz incendio que aparejó venganzas. Añade que a los rebeldes se sumaron elementos para cometer delitos colectivos y afirma que la multitud no tiene voluntad, en sentido jurídico.

El fiscal—sigue diciendo—agrupa a los procesados en directivos y ejecutores, e incluye entre los primeros, por indicios, a los que se supone ejercieron algún mando, pero sólo por indicios, y entre los segundos a los meros ejecutores. Y, en cambio, a los sesenta y siete procesados se les encasilla en el párrafo tercero del artículo 238 del Código de Justicia Militar.

Se refiere después al artículo 242, diciendo que los delitos comunes se juzgarán con independencia de los de rebelión, y con la extraña teoría de la acusación—añade—no habría manera de hacer diferenciaciones. En la forma de apreciar las agravantes resulta enorme la proporción, y para demostrarlo intenta sentar juridicidad.

Niega que pueda precisarse quiénes dieron las órdenes de fusilamiento, y no considera agravantes circunstancias corrientes en una revolución, como las de nocturnidad, en cuadrilla, etc. Niega que sus patrocinados hayan tomado parte en el asalto al cuartel de la Guardia civil, y añade que Marcelino Tejero fué herido en Oviedo y hospitalizado en Mieres, y que si fué a Oviedo lo hizo coaccionado por los revolucionarios. Analiza las declaraciones de los testigos para rechazar las de la acusación. Dice que la declaración de los reos que se han acusado mútuamente, no tiene valor probatorio, porque no son espontáneas, sino arrancadas por la violencia. Alude al miedo insuperable para disculpar la actuación de sus defendidos, y termina pidiendo la absolución de los mismos.

Por último informa don José Fernández Santa Eulalia, defensor de Antonio Tomás García Vizcaíno. Califica de hipersensacional la causa de Turón, por la que existe expectación en toda España. Dice que no se trata de una subversión política. Cree que el Tribunal encontrará grandes dificultades para sentenciar en este caso, pues los procedimientos seguidos constituyeron un torbellino que arrastró por igual a todos los procesados. Por eso pide el triunfo del Derecho para evitar el peligro del error judicial.

Rechaza la tesis del fiscal de que se pueda prescindir de testimonios que aparecen vivos en el plenario. Añade que en el procedimiento sumario se advierten odios y rencores, y en cambio, en el plenario, se ennoblecen al igualarse acusadores y acusados. Pasa a analizar la conducta de sus defendidos para recoger algunas declaraciones que en la causa han favorecido a éstos, y rechaza los cargos que se les hacen.

Las iniciaciones sumariales—sigue diciendo—, se llevaron con poco respeto al procedimiento, y se inició con una acusación global de Cándido del Agua, hijo de una de las víctimas, y los demás testigos coinciden con el anterior, lo que hace suponer que o declararon al mismo tiempo, cosa que parece fué así, o a unos les fueron leyendo las declaraciones de los otros. El único testigo presencial de los fusilamientos, el enterrador, niega la presencia de Antonio Bustos en el cementerio, y por tanto está descartada su participación.

Ataca al testigo Hernández Izaguirre, que fué el que acusó a su defendido de haber participado en el Comité, y señala las contradicciones que se han advertido en las declaraciones de dicho testigo. Pasa después a estudiar el caso de Tomás García Vizcaíno, sometido, a su juicio, a coacciones revolucionarias. Rechaza que éste tomara parte en el asalto contra la Guardia civil, y termina pidiendo la absolución de sus patrocinados y, en toco caso, de suponérseles participantes, cosa que rechaza, lo serían en un delito de auxilio a la rebelión.

SE SUSPENDE LA SESION

A las dos y media se levanta la sesión, para continuarla esta tarde.

LA SESION DE LA TARDE

Por la tarde continuó la lectura de los informes de los defensores.

El señor Moreno Mateos, que defiende a 37 procesados, entre ellos los más importantes, comienza a hablar de la resonancia del nombre de Turón con motivo de los sucesos. Hace un parangón entre la sociedad y el individuo. Saluda al Consejo de guerra y dice que ha de hablar en nombre de 37 procesados que obraron encendidos por el Ideal, y pide que el Tribunal comprenda el motor de un ideal, sea éste cual fuere. Recuerda la frase de Campoamor, que dice: «Ay del día que lancen el «sálvese quien pueda» los hambrientos».

Habla del proceso políticosocial de la República. Dice que las promesas de la República en orden al trabajo fueron ilusiones perdidas, y asegura que es principio jurídico que tanto por acción como por omisión se delinque, y en la revolución han delinquido todos, incluso el Estado.

Al hacer historia de la revolución, niega que en Asturias se hayan cometido cosas que ha pregonado determinada Prensa. Dice que si ha habido algunos casos han sido esporádicos. Habla de las declaraciones de los testigos de cargo y dice que sus manifestaciones están influídas por el dolor y en algunos casos hasta por la venganza. Estudia especialmente las declaraciones prestadas por José Hernández Izaguirre y José Gómez. Señala la coincidencia de estas declaraciones e incluso copia frases que constan en el sumario, para demostrar que, o declararon los interesados al mismo tiempo, o se les dieron a conocer las declaraciones de los demás, lo cual es una falta a las normas de procedimiento. Dice también que si es cierto que a los testigos se les obligó a fabricar tubos para bombas, no pudieron ver nada de lo que dicen.

—No hay, pues—añade—, causante directo de los delitos. La rebeldía—dice—es por sí ya un delito, pero por tiempo variable. Sólo durante la acción continuada, hasta su fracaso. Es un error de procedimiento que del período sumarial se extraiga el material de calificación definitiva que es lo que ha hecho en este proceso el fiscal.

La trascendencia de este proceso es de tal magnitud, que pasa más allá de las fronteras, y no puede quedar duda alguna de la garantía procesal para que no alarmen a la opinión las anomalías, como ocurrió con el incendio del Reichstag.

Dice que ningún jurista puede calificar los fusilamientos habidos como delitos comunes, porque no es posible la separación de las características en un caso de rebelión militar, y así se ha considerado en otros procesos relacionados con los mismos sucesos de Asturias.

Estudia minuciosamente el caso de cada uno de sus patrocinados y considera nula la prueba judicial, sin dejar de recoger aquellas declaraciones que, como los del párroco de Turón, considera de descargo para sus defendidos, terminando agrupando a estos en dos núcleos y dice que en todo caso unos pueden ser reos de auxilio a la rebelión militar y cita entre estos a Silverio Castañón, Servando García y Nico-